

Realidad Nacional

No.7 Enero,2007

La gestión Manuel Zelaya UN AÑO DE PRIMEROS PASOS

El inicio de la gestión del Presidente Manuel Zelaya Rosales, hace un año, presagiaba un período más inestable de Gobierno. Se temía la cantidad de problemas sociales por estallar, sin embargo, la situación no llegó a extremos, con una política oficial apagafuegos que tuvo la fortuna de irse encontrando con una situación macroeconómica estable.

En realidad, los conflictos acompañan la administración de Zelaya, desde la prolongada lucha de los maestros a favor de su estatuto – que tuvo momentos de violencia e indudable tensión- hasta el más reciente pique con las transnacionales de los combustibles, del que no se sabe cómo saldrá librado el gobernante. Mientras duren los precios internacionales bajos, el tema de los combustibles será un flotador para la imagen del gobierno.

Entre ambos hay numerosos temas que caldearon el ambiente, derivados de la mala gestión de los bosques, del agua, de la tierra y de los recursos públicos. Olanchito, por ejemplo, fue escenario de un conflicto prolongado que tuvo como uno de sus protagonistas al padre Tamayo y que culminó con el asesinato de dos ambientalistas.

Ligado al tema medioambiental estuvo la lucha contra la explotación minera a cielo abierto y toda la política previa de regalar concesiones territoriales. La población de occidente – encabezada por organizacio-



nes como ASONOG y altos representantes de la Iglesia Católica- fue una de las más activas en plantar cara en defensa de los recursos naturales.

Los primeros seis meses fueron con esa tónica de un gobierno negociando, entre acorralado y provocador, y las organizaciones reclamando. En ese marco se resaltó un hecho fundamental: la ausencia de un plan integral para afrontar la crisis del país.

Ya desde su etapa electoral, Zelaya Rosales se perfiló como un candidato sin programa, pero con muchas promesas, aunque renuente a suscribir compromisos con la sociedad civil. Apenas unos cuantos, entre ellos uno firmado

con las organizaciones de mujeres a favor de ejecutar un plan nacional de equidad de género. Un año después las organizaciones le reclaman cumplir lo pactado.

Resulta interesante precisar que el Presidente Zelaya encabeza un estilo de gobierno personal, no institucional, que resume una curiosa mezcla de nacionalismo y populismo.

Lo del nacionalismo "a la olanchana", comenzó con un coqueteo de Zelaya Rosales con el presidente venezolano Hugo Chávez, en realidad una especie de amor de lejos, despertando los temores de los sectores locales más conservadores y del propio gobierno de EEUU.

Col. Alameda, Ave. Tiburcio Carías Andino, Casa No. 1011, Apdo. Postal 12468, Tegucigalpa, Honduras. Tel/fax: (504) 239-2110/10

Correo electrónico: fosdeh@cablecolor.hn Pagina web: www.fosdeh.net

Financiado por el Fondo ACI-ERP y DIAKONIA



FOSDEH
FORO SOCIAL DE DEUDA EXTERNA
Y DESARROLLO DE HONDURAS



En círculos empresariales del sector norte, Valle de Sula, llegaron a escandalizarse pensando que con los liberales habían llegado los “comunistas” al poder, que sus inversiones corrían peligro, y que se debía hacer algo para cambiar el rumbo.

Incluso se llegó a pensar que todo el lío de cambiar el modelo y la fórmula de compra y comercialización de combustibles apuntaba en la dirección de favorecer la empresa estatal venezolana de petróleo. La embajada de EEUU denunció reuniones “secretas” entre funcionarios de gobierno y emisarios venezolanos.

Al final, la favorecida con la licitación fue una transnacional norteamericana, CONOCO PHILIPS; ahora renuente a firmar el contrato respectivo, y con Chávez no se pasó a más; incluso la Cancillería ni siquiera ha nombrado el Embajador de Honduras en Caracas y rechazó – dando largas al beneplácito- al embajador venezolano propuesto por Honduras. Con esa actitud el presidente Zelaya no solamente marca distancia con Chávez, sino que impide que Venezuela condone una deuda bilateral aproximada de 25 millones de dólares.

Zelaya se caracteriza más por la hipertrofia de sus promesas que por una política integral, coherente y de enfoque estratégico. Sus medidas aisladas suelen ser populares y bien intencionadas, pero desconectadas entre sí.

Son medidas de sentido común, de visibilización política, pero de corto plazo. Por ejemplo, el traspaso de competencias de la Estrategia para la Reducción a la Pobreza (ERP) a las municipalidades no formó parte de una reforma integral a favor de la descentralización y modernización del Estado que permitiera apoyarlas de manera decisiva en

mejorar su capacidad de gestión, así como sus procesos de transparencia .

De lo que se trata es aprovechar la variedad de mecanismos institucionales y organizativos a través de los cuales se puede influir el desarrollo municipal, como los consejos de desarrollo comunal y local. No es tarea fácil, sobre todo si el acompañamiento positivo que debiera dar el gobierno central se vuelve negativo.

Lo que ocurre es que en el país se continúa impulsando un modelo concentrador de las oportunidades y recursos en un pequeño grupo de municipios, especialmente los ubicados en el corredor central por donde transita el comercio, mientras que para el resto hay muy pocos recursos disponibles para atender las necesidades sociales y productivas apremiantes, y lo disponible a través de la ERP es cada vez más exiguo.

En la práctica existe una resistencia para facilitar la presencia de los diferentes sectores de sociedad civil en los espacios que se han establecido para conducir el proceso de descentralización.

En otro aspecto clave, la empleomanía sectaria en la burocracia resalta la importancia de una reforma profunda al servicio civil; tan necesaria como rechazada hasta ahora por los políticos. Miles y miles de nuevos funcionarios públicos fueron empleados con un solo requisito: ser activistas liberales.

De manera similar, es positiva la decisión gubernamental de no aumentar o crear impuestos a la población, pero lo sería más si es acompañada de una estrategia oficial a favor de una reforma fiscal profunda.

Los pasos fiscales que se dieron evidenciaron más bien una política centralizadora y orientada a favorecer a elites ya privilegiadas y que ahondan las desigualdades internas. Un ejemplo es el caso de las maquilas y la zona sur del país, donde – pese a ser una de las regiones con mayor pobreza- se decidió reducir el salario mínimo para favorecer la rentabilidad de las empresas, aprovechando la necesidad de empleo de la población en la zona.

Bajo esa lógica, la pobreza es una carga cada vez más abrumadora para la mayoría de la población, pese al anuncio oficial de que en el 2006 el índice de pobreza bajo casi cuatro puntos, al reducir de manera mágica el costo a nivel urbano y rural de la canasta básica de alimentos.

En realidad, como en toda valoración, el criterio final respecto a si el gobierno ha estado bien, regular o malo dependerá de la esfera de intereses de cada quien, de su nivel de vida y de sus expectativas de país.

En este caso, el FOSDEH presenta un balance destacando cuatro temas centrales: la economía, la lucha contra la corrupción, las relaciones con la sociedad civil –en las cuales se incluye la ERP- y la actuación del poder Legislativo.

En esa perspectiva, el 2006 marcó retos a fin de que el gobierno mejore su capacidad de respuesta a la angustia y necesidades de la mayoría de la población.

Bajo esa lógica, la pobreza es una carga cada vez más abrumadora para la mayoría de la población, pese al anuncio oficial de que en el 2006 el índice de pobreza bajo casi cuatro puntos, al reducir de manera mágica el costo, a nivel urbano y rural, de la canasta básica de alimentos.



La macroeconomía no anda mal, pero....

El balance del 2006 y las perspectivas del 2007 tienen que tomar en cuenta que el país vive un período de relativa estabilidad macroeconómica. La inflación ha bajado a niveles no observados desde 1992 (principalmente por el congelamiento virtual de los precios de productos básicos y los subsidios al combustible), hay un aumento de las reservas internacionales netas para cubrir cinco o seis meses de importaciones, con un crecimiento económico de 4.5% anual (comparada con 3.8% en el 2005), el tipo de cambio permanece estable, el déficit fiscal no llega a 3%, la inversión del sector público respecto al PIB equivale a 6% o 7% y se reporta un aumento del valor agregado en sectores claves de empleo, como la maquila (12%).

¿Todo bien? En realidad, no. La extrema desigualdad hace que los beneficios se concentren en quienes más tienen, no en quienes más los necesitan. Aunque hay que señalar que esta es una herencia de los dos partidos políticos que han estado en el poder.

Hay más centros comerciales; el Presidente Zelaya terminó el año inaugurando uno en el cual su vice presidente, Elvin Santos, es de los accionistas principales. En efecto, uno de los sectores más dinámicos de la economía en el 2006 fue la construcción privada, especialmente en edificaciones comerciales. No importa que en cada nuevo "mall" se repitan las mismas tiendas, pero esos inmensos

escaparates del consumo están hechos para terminar de sacar las remesas de los emigrantes y devolverlas al exterior mediante el consumo de bienes importados.

Otro sectores que reportan "buen comportamiento" son la banca, destacando el crédito para consumo e hipotecario; las telecomunicaciones, estimuladas por la actividad de telefonía fija y móvil; la agricultura, sobre todo por una mayor producción de café y palma africana; la electricidad, debido a la generación de energía eléctrica térmica; y los servicios diversos.

La mala noticia es que la industria no tiene el mismo ritmo de crecimiento y se expande lentamente, como resultado de un decrecimiento en la producción de bienes metálicos y de sustancias y productos químicos, así como por una fuerte desaceleración en la producción de textiles, productos de vestir y calzado. ¿Y la producción de alimentos?

Cuidado con los espejismos

En términos generales, los indicadores macroeconómicos se muestran positivos, pero la pobreza absoluta no cede. El motor actual de la economía hondureña es el consumo (basado en las remesas) y no la inversión. Las remesas llegan al extremo de representar el 21% del Producto Interno Bruto

del País(PIB).

Como nunca el país depende de los dólares que envían los emigrantes y eso forma parte de los elementos de "suerte" que acompañan la gestión liberal. Para el 2006 la inyección se aproximó a los 2,300 millones de dólares, rebasando los cálculos, y para el 2007 se estima, como mínimo, de unos 3.100 millones.

La contraparte de los dólares que vienen, son los hombres y mujeres que se van. Para mantener ese ritmo de crecimiento de las divisas, se requiere "exportar" unas 300 mil personas a corto plazo. Así, la base del actual crecimiento económico no es sólida, ni sostenible. Las consecuencias productivas, sociales y culturales negativas de la emigración masiva son constantemente advertidas desde organizaciones ciudadanas, pero no tomadas en cuenta por el Estado.

El FOSDEH y el FONAMIH (Foro Nacional de Migraciones) insisten en las consecuencias negativas de esta "burbuja", pero las advertencias no se escuchan en esta "borrachera" del consumo.

En perspectiva destaca el reto de que esas remesas sirvan para financiar proyectos de desarrollo, nacionales, regionales, locales y familiares, y no se limiten a inyectar de capital el sector servicios y enriquecer a la banca, pero aún no se vislumbran posibilidades para esa conversión en el destino del dólar "mojado".

De ello se desprende que el desafío central que tiene la sociedad hondureña es dar continuidad a los aspectos positivos de la macroeconomía, pero con aportes reales y significativos en la reducción de la inequidad social, donde se gesta la pérdida y el desperdicio del capital humano.

En términos generales los datos oficiales apuntan a una estabilidad económica que no reduce ni la inequidad ni la desigualdad social existente. Las demandas sociales de acceso a salud y educación (imprescindibles dentro del capital humano) de la mayoría de la población se multiplican pero encuentran siempre un Estado insolvente para satisfacerlas o un Estado que destina sus recursos a otros beneficiarios.

De hecho, la inversión social, no en gastos corrientes, de Honduras está siendo financiada casi en un cien por ciento con fondos de la cooperación internacional o los organismos de crédito. Proyectos vitales como los de saneamiento básico, incluyendo agua potable, dependen en alto porcentaje de ayuda internacional.

De manera resumida, debemos resumir que la política económica no ha cambiado, de hecho las exportaciones se calculan por parte de la revista *The Economist* en US\$ 1,936 millones y las importaciones en US\$ 4,855 millones, por lo tanto nuestra política económica impulsada y aprobada por la cooperación internacional a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) lo que verdaderamente exporta son migrantes; sin remesas no existiría la tan afamada "estabilidad macroeconómica".

Humanizar la economía

Recorrer los pasillos del Hospital Escuela debe ser indicador suficiente como para introducir reformas de fondo en la dinámica nacional. Los rostros de los pacientes y la angustia de los familiares describen una crisis humana profunda, pero pocos altos funcionarios de gobierno los ven.

Nominalmente, fondos para atender la deuda social interna e impulsar la Estrategia de Reducción a la Pobreza (ERP) existen, pero no provocan cambios significativos. En el 2006 el gasto social del Estado fue superior a los 20 mil millones de lempiras, sin que mejorara la capacidad pública para responder a las demandas sociales. Para el 2007 el presupuesto aumentó a 23 mil millones de lempiras, y todos saben que se repetirá la historia.

En el plano económico, el otro elemento de suerte que beneficia a Zelaya es el alivio de deuda procedente de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), del Club de París (bilateral), organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) y del G-8 (Grupo de Naciones más industrializadas).

Los millones de dólares que debían pagarse

Honduras no tiene mucho tiempo para lograr una estabilidad macroeconómica, que no se sostenga a costa de los migrantes

como servicio de deuda pueden, responsablemente empleados, mejorar las condiciones sociales del país, pero ¿está pasando eso?

El punto es que el progresivo debilitamiento del "tejido social" hondureño por el avance de la emigración (mantener el ritmo actual de ingresos por remesas implica exportar 18% de la PEA), pobreza (64% promedio) y la extrema desigualdad afecta a todos los ámbitos del país y hace muy difícil que el país alcance promedios significativos de cumplimiento en sus metas de la ERP y Objetivos del Milenio. Más aún a nivel rural donde las brechas tienden a profundizarse, volviéndose prácticamente imposible acercarse al promedio nacional.

Como contrapartida esperanzadora, en el interior de Honduras hay procesos interesantes de alianzas prácticas entre autoridades locales y organizaciones sociales que están creando un espacio común de planificación y ejecución bajo condiciones de mayor transparencia. Las mancomunidades (alianzas entre municipios) surgen tras objetivos comunes, los proyectos innovadores que capacitan en modelos sostenibles, las comunidades que diseñan planes de desarrollo a mediano y largo plazo, el fortalecimiento de las capacidades locales, las redes formales e informales en producción, comercialización y ahorro, son algunos ejemplos.

El FOSDEH es testigo de primera fila de todo ese potencial puesto que acompañó a unas 200 organizaciones sociales de base en la preparación de estrategias regionales de combate a la pobreza. Esos documentos no fueron producto de escritorios, sino de consultas, desvelos y esfuerzos de la propia población involucrada. Pese a ello, el gobierno Zelaya aún no las toma en cuenta.

El gobierno del "Poder ciudadano" da la espalda a la principal riqueza del país, precisamente el crecimiento de su ciudadanía, aún en condiciones heterogéneas y dispersas, puesto que la capacidad del pueblo para organizarse le permite no sólo acceder a recursos sino emplearlos de manera más efectiva que la que hace el Estado.

Concertación versus confrontación: ¿qué se prefiere?

Lo anterior demanda una política de concertación nacional que se proponga acelerar y ampliar la base del crecimiento económico mediante la inclusión social, a partir de una reforma fiscal que no contemple nuevos impuestos regresivos sino mejorar la recaudación; por la vía administrativa y haciendo que los sectores que perciben los mayores ingresos contribuyan en una mayor proporción; invertir más presupuesto en capital humano, mejorar la focalización, eficiencia e impacto de la inversión pública, priorizar la inversión ERP, fortalecer de manera integral los procesos de descentralización, promover una efectiva transparencia y auditoría social, atender el desafío medioambiental de gestión de riesgos (incluyendo lo energético) y mejorar las condiciones de seguridad en el país (ciudadana y jurídica).

Honduras no tiene mucho tiempo disponible para lograr esos acuerdos. Su estabilidad macroeconómica del 2006 es frágil. Para el 2007, ante un entorno internacional ligeramente menos favorable en términos de crecimiento económico, especialmente en Estados Unidos, el principal socio comercial de Honduras, los expertos anticipan un crecimiento económico menor al de 2006. Además, se esperaría una desaceleración del sector agropecuario, sobre todo por la fase de contracción del ciclo cafetalero, justo en el momento en el cual la cotización de ese grano está en alza.

A lo anterior hay que sumar que el caballo desbocado de las ambiciones electorales ya comenzó su carrera desenfrenada en el país. Una tendencia desfavorable se está dando ya en el comercio exterior de la economía hondureña. El déficit en la cuenta comercial de bienes alcanzó más de US\$ 3,109 millones en el 2006. Con la excepción del café, el conjunto de las exportaciones hondureñas, apenas crecen.

En cambio, las importaciones de bienes muestran un fuerte crecimiento (19.9%). Las compras externas de mayor aumento el año anterior fueron los combustibles y lubricantes (37%), los materiales de construcción (35.1%), los bienes de consumo (26.8%) y los bienes de capital para el transporte (23.3%) y la agricultura (16.3%). Este fuerte crecimiento de las importaciones refleja que una mayor proporción de la demanda interna (consumo e inversión) se cubre con compras externas, perdiendo participación la propia producción doméstica.

En febrero de 2007 vence el acuerdo con el FMI. Dado los antecedentes comentados, es de esperar que las negociaciones entre el gobierno y el organismo financiero sean complejas, y que existan diferencias en la fijación de metas.

Con los pies sobre el vacío

Como quiera que sea, la economía hondureña pende básicamente de dos hilos: el valor agregado de la maquila (US\$ 823 millones en el 2006) y las transferencias de los emigrantes (US\$ 2,232 millones). La maquila se expande por diversas regiones del país, mientras que las remesas aumentan aceleradamente.

En el contexto, hay desajustes importantes que el Estado no termina de resolver, entre ellos el desastre financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la fragilidad de la empresa estatal de telecomunicaciones (Hondutel) y las erogaciones por subsidios al combustible, la energía y el transporte. Todos son recursos multimillonarios que bien empleados podrían aliviar la deuda social acumulada.

Sólo para no olvidarlo: el endeudamiento interno podría aumentar en los años venideros, si el gobierno se ve obligado a utilizar dicha modalidad para satisfacer las mayores erogaciones que implica la satisfacción de las demandas sociales que enfrenta.

A diciembre del 2006 el endeudamiento interno ascendió a más de 7 mil millones de lempiras, y que adicionalmente representan un pago de 2,860 millones de lempiras anuales en el pago de su servicio (ojo que esta cantidad es mayor al alivio de deuda externa recibido por el país durante el 2006 y que anduvo en aproximadamente 2,700 millones de lempiras).

O sea que si el crecimiento de la deuda externa obligó a pedir alivio y perdón a los acreedores, es posible que en el futuro mediato el crecimiento de la deuda externa obligue a pedir perdón y alivio al propio pueblo hondureño. ¿Será muy tarde para entonces?

Es oportuno recordar que las obligaciones laborales del gobierno le hicieron recurrir en diciembre del 2006 a un nuevo endeudamiento interno. Lo anterior confirma que aunque se lograron las metas de recaudación tributaria interna, los ingresos proyectados se quedaron cortos en un 17% respecto a lo esperado para el mismo año.

Sobre la realidad de la deuda externa la información entregada oficialmente es inexacta. Aunque se condonen US\$ 1,400 millones por el BID en los próximos meses, hay que esperar disminuciones de lo adeudado (no solo de capital) en un plazo de 40 años. Es decir dividir el monto condonado en 40 años.

El Presidente Zelaya, esta repitiendo el mismo discurso que promovió el ex Presidente Ricardo Maduro, al decir que la deuda externa se redujo en más de 3 mil millones de dólares... lo que nunca dicen, insistimos, es que la misma se hará en un período de 40 años.

Tanto la revista The Economist, como las mismas cifras del Ministerio de Finanzas indican que la deuda externa de Honduras a diciembre del 2005 era de 5,900 millones de dólares y que para diciembre del 2006 era de más de 5,600 millones de dólares.

El desfile de la corrupción en 2006



Al valorar la gestión del gobierno que encabeza el Presidente Zelaya hay que detenerse en el tema de la corrupción. En Honduras se tiene la mala costumbre de "engavetar" lo sucedido el año anterior, y sobre todo si se trata de los obstáculos que vamos acumulando como país. Contrario a los intereses de muchos sectores de poder que intentan borrar sus actos ilícitos, siempre habrá historiales "a veces inesperados" donde quede el registro de lo sucedido. A pesar del sistema de impunidad en vigencia, una de las materias que tiene un extenso registro periodístico dentro de la realidad nacional es la corrupción.

El 2006 fue un año cargado de escándalos de corrupción. Para sustentarlo, según declaraciones del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Sergio Membreno, apenas de enero a abril de 2006 se anotaron 84 denuncias de casos de corrupción; visto de otra forma: el CNA registró cada 36 horas un nuevo atraco a los fondos públicos. Sin duda, una muestra; no la totalidad de lo que ocurre bajo la sombra del poder.

La tendencia inicial del primer año del gobierno de Zelaya Rosales fue denunciar o "filtrar" al público denuncias de casos de corrupción de la administración anterior; máxime que era responsabilidad de otro partido. Se habló, por ejemplo, que en las últimas dos semanas de enero, antes de entregar la Presidencia Maduro, el Banco Central emitió cheques por más de 400 millones de lempiras a favor de diversas personas. La cifra asombró, pero en Honduras se permite que los actos de corrupción se conviertan en historia antes de tiempo.

Los nombres y apellidos de los supuestos corruptos se publican diariamente a través de los medios, pero como aparecen se van (para reaparecer después, muchas veces, en el pie de foto de las páginas de sociales); los escándalos se silencian y a lo sumo algunos

de los involucrados son citados a los juzgados para declarar –pero raramente son condenados.

Así es como, entre la denuncia escandalosa y la ineffectividad de los organismos competentes, se ha colocado a Honduras en el fondo de la tabla del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2006. Según Transparencia Internacional (TI); Honduras tiene un IPC de 2,5 (en la escala de 0 a 10); con lo cual sólo hay dos países latinoamericanos más "corruptos" que el nuestro.

El costo económico de la corrupción también es medible; aunque obviamente sólo se tengan estimados. Según una opinión del analista y ex director de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Jorge Yllescas, con fecha de junio del año pasado, "los corruptos han amasado una fortuna de unos \$ 30,000 millones; en bancos extranjeros hay alrededor de \$ 16,000 millones producto de este lucrativo y sucio negocio".

Lastimosamente no existe una medición que indique el profundo y muchas veces irreparable costo social y cultural que la corrupción conlleva. Es en el pueblo hondureño donde recae con mayor presión el precio de las consecuencias sociales que genera este delito. Probablemente el indicativo más cercano a éste sería el de la pobreza; ya que no hay que olvidar que en cuanto más corrupción exista, más pobreza habrá.

La corrupción es un delito social que tiene una consecuencia diaria en la calidad de vida y en los derechos humanos de la ciudadanía. Dentro de esta cadena, el robo a los bienes públicos crea vacíos y desabastecimiento en las respuestas que el Estado tiene como obligación darle a las demandas de la población necesitada. Para decirlo en otras palabras: cada lempira que alguien se roba del presupuesto de la Secretaría de Salud es una medicina menos al alcance de un enfermo o menos oportunidades de ampliar la cobertura educativa o la calidad de la misma.

Esa es la razón que anima a diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el FOSDEH, para reclamar una transparencia y rendición de cuentas que libere a Honduras del secuestro socioeconómico en que la mantienen los corruptos a más del 70% de la población de Honduras que es pobre.

El resultado más visible de este trabajo colectivo en 2006 fue la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Resultado que más que un logro surge como un reto.

La ley entre otros objetivos pretende que la ciudadanía se mantenga correctamente informada, para tener así, una mayor participación como auditora en el manejo de las decisiones públicas; y que la rendición de cuentas sea un ejercicio cotidiano dentro de nuestra democracia.

Un breve recuento de lo sucedido

Todavía sonaba el eco del improvisado discurso del Presidente Zelaya en su toma de posesión del 27 de enero de 2006 cuando trascendieron las primeras denuncias de corrupción, ya no del gobierno anterior, sino del actual.

El primer escenario de las denuncias fue la Secretaría de Salud y el involucrado el propio ministro, Doctor Orison Velásquez, quien de entrada advirtió que encontraba una situación "caótica" y que era necesaria una auditoría que revelara los hechos. Un mes después, por marzo, reveló irregularidades en los centros asistenciales de la zona sur. Fue el último momento en que Velásquez asumió el papel de acusador, puesto que en los meses siguientes pasó a ser acusado.

Una de sus decisiones más polémicas fue rechazar los servicios que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) prestaba al ministerio en la compra de medicamentos. Las transacciones involucradas eran multimillonarias, unos 550 millones de lempiras, y el papel del PNUD era transparentar el proceso.

En el período en que estuvo vigente, ese mecanismo de licitación ahorró al Estado decenas de millones de lempiras y evitó que influyentes intereses empresariales y personales se lucraran más de la cuenta a costa de las enfermedades del pueblo. Una campaña pública, de origen desconocido, se levantó en contra del PNUD, achacándole la responsabilidad ficticia del desabastecimiento de medicinas en los hospitales.

El asunto adquirió niveles tan turbios que el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Carlos Godoy, recibió amenazas de muerte en su teléfono celular debido a que había denunciado irregularidades a fondo del sistema de salud.

Al final, que siempre es un final relativo, el ministro fue obligado a renunciar por el propio Presidente de la República, pero el argumento no tuvo que ver con las denuncias de corrupción sino con la "responsabilidad" de haber

contratado más personal –activistas liberales- de la cuenta en la Secretaría de Salud. Una práctica por demás común en la administración pública que es impulsada a distintos niveles por el partido en el gobierno.

Ahora Órison Velásquez, quien siempre rechazó las acusaciones en su contra y declaró haber sido utilizado por su partido, se dirige de nuevo a su clientela a través de cuñas radiales en las que se escucha el siguiente mensaje: "se le recuerda a la amable clientela, que el Dr. Órison Velásquez ha vuelto a abrir las puertas de su clínica...".

Más y más casos

Siempre en el sector salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) también se vio involucrado en una denuncia donde se le señaló de mantener en secreto los resultados de una auditoría externa de transparencia que le practicó el Banco Mundial. Todavía se desconoce ese informe, lo cual a los sectores de ciudadanía ya no nos sorprende.

En realidad, contra el seguimiento público adecuado de cada denuncia conspira el rápido surgimiento de otras denuncias, varias de prácticas "cotidianas". Para el caso, un ex jefe de personal de la Secretaría de Educación fue denunciado porque vendía plazas magisteriales a "cualquier" persona. Incluso el COPEMH divulgó el caso de un motorista del Instituto Luís Bográn quien fue colocado en una plaza de docente, devengando un salario de siete mil lempiras, y de paso no sabía ni conducir. Cinco meses después, a mediados de año, el Juzgado de Letras de lo Penal condenó a cinco años de prisión al ex funcionario –Rafael Lagos- y se le impuso una multa de casi medio millón de lempiras.

Todavía sonaba el eco del improvisado discurso del Presidente Zelaya en su toma de posesión del 27 de enero de 2006 cuando trascendieron las primeras denuncias de corrupción, ya no del gobierno anterior, sino del actual.

Por otra parte, en 2006 los maestros jubilados del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) siguieron sufriendo los actos ilícitos en los que frecuentemente se ve inmersa dicha institución desde ya hace muchos años. Según denuncias de miembros de la directiva del Colegio de Profesores de Unión Magisterial (COPRUM), el INPREMA sigue politizado, ya que entre otras cosas, hubo pruebas que a los empleados de esa institución les deducen por planilla cuotas para las finanzas del Partido Liberal (también algo común). En febrero, aparecieron otras denuncias en contra del INPREMA; en las cuales se le señaló de haber repartido puestos de trabajo con salarios exagerados, además de hacer transferencias monetarias ilícitas a dirigentes magisteriales. Los casos tampoco pasaron a más.

También por los medios escritos circularon denuncias en contra del director departamental de Educación, Saúl Armando Juárez, por los supuestos delitos de falsificación de documentos y traslados ilegales de docentes, entre otros. Por su parte, representantes de la Secretaría de Educación señalaron que Aminta Alcocer, ex directora departamental de Cortés, tuvo 70 acusaciones en su contra, todas relacionadas con actos irregulares. ¿Alguien sabe qué es de ella en estos momentos?

La mayor casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también fue escenario de denuncias. La Junta de Transición apenas reveló unos cuantos casos, pero suficientes como para sonar todas las alarmas. Lo que se evidenciaba es que la "autonomía" universitaria y el prolongado control que sobre ella han tenido grupos de poder ha servido para amasar fortunas personales incalculables.

Cien en imaginación, cero en ética

La imaginación de los corruptos universitarios es desbordante. Un caso usual fue lo denunciado en el Centro Universitario Regional del Norte (CURN), con un tráfico de notas en el que se vieron involucrados 29 ex alumnos y una ex jueza. Una bagatela comparada con otros asuntos que la misma Junta de Transición no se atrevió a revelar en público. Saliendo del área educativa, las Fuerzas Armadas también fueron noticia en el primer año de gobierno de Zelaya Rosales, no por hechos recientes, sino del pasado. Un ex gerente del Instituto de Previsión Militar (IPM) fue uno de los coroneles más buscados por la Policía Internacional (INTERPOL) por el "desvío" de 5,2 millones de lempiras, –según las investigaciones- sacados, literalmente, en sacos del IPM. Encausado judicialmente, el implicado logró que el 10 de mayo la Corte Primera de Apelaciones admitiera un recurso a su favor. De ese mismo juicio se desprendió un escándalo de soborno a un magistrado. Después del fallo legal vino el silencio...



Las autoridades de la AFE-COHDEFOR, junto a efectivos de las Fuerzas Armadas también se vieron implicadas en conjunto, en una denuncia de tráfico ilegal de madera.

A su vez, el gerente de la COHDEFOR, Ramón Álvarez denunció a los dos últimos gerentes de la institución por autorizar a un mayor del Ejército para que extrajera 200 mil metros cúbicos de madera a cambio de no demandar al Estado por la "invasión y aprovechamiento" que se hizo en un predio de su propiedad, en el municipio de Jano. Álvarez reveló que las autoridades anteriores de esta institución practicaban un curioso trueque: permisos de explotación de bosques a cambio de no ser procesados. Ello explica, de alguna manera, la denuncia del padre Andrés Tamayo, como coordinador del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), de que 278 rastras y camiones cargados de madera, circulaban ilegalmente en el departamento de Olancho.

Durante el taller Regional "Monitoreo Forestal Independiente", patrocinado por Global Witness y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, llevado a cabo el año pasado, se estimó que en Honduras se pierden aproximadamente 18 millones de dólares anuales sólo en impuestos a raíz del corte ilegal de madera.

Cambiando de canal. En enero de 2006 la Fiscalía contra la Corrupción inició una investigación para determinar la veracidad de una denuncia sobre el extravío de fertilizantes donados al país por el gobierno de Japón; que supuestamente comercializaron empresas de agro servicios. La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) respondió que dicha venta está enmarcada en la ley. No se volvió a publicar nada más sobre el tema.

Siguiendo en la línea de los ilícitos relacionados con donaciones externas, en las páginas de La Tribuna se publicó un caso en el cual una comisión italiana tuvo que venir a nuestro país a investigar si hubo o no malversación en los fondos que el gobierno de esa nación europea

donó para financiar proyectos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería a través del PRONADEL. Tampoco el tema volvió aparecer en los medios escritos.

El agro es pobre, pero enriquece y hay mil formas de hacerlo. Una ex ministra de Recursos Naturales fue denunciada ante la Fiscalía contra la Corrupción por el supuesto delito de abuso de autoridad, sin que la denuncia pasara a más. Entre otras denuncias se le imputan las acusaciones de haber dejado sin fondos a la Fundación de Amigos de la Tigra (AMITIGRA), en represalia por la protesta de esa organización a permisos oficiales de construcción de residencias cedidos a empresarios privados. Otro negocio de poca monta comparado con los que están ocultos.

Uno de los casos que tuvieron sus "cinco minutos del gloria" el año pasado tuvo que ver con la Empresa Nacional Portuaria; luego que un gerente otorgara la licitación sin concurso, de construir el muelle dos de Puerto Cortés, a una empresa privada. Pero ese apenas fue un caso; de la ENP la misma salida de su primer gerente, José Arriaga Yacamán, reveló las inmensas presiones que se reciben en un cargo de esa naturaleza por intereses voraces.

El INA y su agonía costosa

Si hablamos de corrupción en 2006, no se pueden obviar los escándalos referidos al Instituto Nacional Agrario (INA). El Sindicato de dicha institución denunció que los dos ex ministros del INA, Erasmo Portillo y Henry Acosta, se beneficiaron del presupuesto de esta institución agraria. Las denuncias cayeron una tras otra: "Henry Acosta, se recetó alrededor de 220 mil lempiras por concepto de vacaciones... se despilfarraron los fondos en compra de terrenos... Erasmo Portillo y Henry Acosta, se beneficiaron al autorizar desembolsos por pago de presta

ciones y honorarios, así como otros estipendios a varios funcionarios que aún laboran ahí... en la comunidad de Vallecillos, Colón, se compró dos veces un terreno de 17 millones de lempiras, ¡con un costo real de 4,3 millones!... la Asociación Nacional de Campesinos (ANC) los señala de haber hecho la compra de un predio de 400 manzanas en Talanga, Francisco Morazán, a un costo superior al real... dilapidados 35 millones de Lps.: el caso es de un predio de 30 manzanas, ubicado en Agua Prieta, Cortés, cuyo valor real era inferior a los 3 millones de lempiras, pero Acosta dio la orden para que se comprara por más de 15 millones... creación de cajas rurales fantasmas en el INA... (El Heraldo, 18/4/06): Henry Acosta renuncia de la Alcaldía Capitalina... el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó un reparo por 30 millones de lempiras en contra del ex director del INA, Erasmo Portillo, y cinco funcionarios más de esa institución... investigan más denuncias de corrupción en el INA... otra venta irregular en el INA... el SITRAINA exigió al Ministerio Público interponer acusaciones penales en contra de los ex directores de esa institución Erasmo Portillo y Henry Acosta...". Los medios hicieron ver una podredumbre impresionante, para después... callar.

Así transcurre la mayoría de las denuncias. ¿Realmente quién recuerda cuál fue el desenlace judicial de los implicados en el pasaportazo, en el chinazo y tráfico de hindúes? Según el Ministerio Público, las investigaciones permanecen engavetadas en uno de los archivos de la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán.

No hay área pública donde no haya irregularidades. Una de apariciones constantes es la migratoria, con un tráfico incesante de personas - hondureños y extranjeros- que sueñan llegar a EEUU. Se denunció, por ejemplo, una presunta maniobra de un ministro para favorecer el ingreso al país de un par de libaneses, de bosnios, y un albanio.

Luego trascendió una pareja de cameruneses que tenían todos sus documentos personales acreditados como hondureños, salvo que no hablaban nada de español, ni habían estado nunca en Honduras. La pista de este asunto llegaba al Registro Nacional de las Personas...pero, de nuevo, no pasó nada.

Quizá, aunque la competencia es dura, el escenario más simbólico de la corrupción en el 2006 fue el aeropuerto internacional de Toncontín. Primero, un intento descarado en el Congreso Nacional de favorecer a "Interairports"; luego trascendió que la DEI había detectado un "furgonazo", con mercancías procedentes de Panamá, las cuales entraron al país por El Amatillo y Puerto Cortés, y que luego, remitidos al almacén fiscal del aeropuerto no recibieron el procedimiento oficial de aduanas. Según información recabada, hubo pruebas contundentes en contra de 18 empleados de la guardatura de Toncontín involucrados en el contrabando. La pérdida económica por defraudación fiscal al Estado se estimó en cien millones de lempiras. ¿Qué hubiera significado esa suma de haberse invertido en mejoras para el hospital Escuela?

Sin embargo, el caso más "público" de corrupción ocurrió en septiembre, cuando dos pilotos mexicanos llegaron al aeropuerto, aterrizaron un jet, se fueron a dormir a un hotel y a la mañana siguiente, seguro después de afeitarse y desayunar, abordaron un vuelo comercial y se largaron dejando una pregunta sin respuesta para la mayoría de los hondureños: ¿quién era el propietario del avión, para quién venía, qué fue lo que le descargaron en la noche de su llegada y cómo fue posible tal impunidad y tolerancia?

Lágrimas...de cocodrilo

En otro vuelo rasante a la realidad nacional, a principios de abril, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizó 70 auditorías en todas las alcaldías del país, encontrando varias irregularidades en 38 de ellas. En una, San Pedro Sula, terminó ocurriendo la circunstancia más inesperada y simbólica de todas: ver al ex alcalde Oscar Kilgore, llorando y escondido debajo de una mesa para que los agentes no lo capturaran. Kilgore mostró la verdadera pasta de que están hechos los políticos.

Según la Fiscalía y que consta en los expedientes, Kilgore y otros ex funcionarios de la Alcaldía sampedrana, en el pasado modelo de buena gestión del erario público, se beneficiaron de una cuenta con fondos municipales en el Banco La Constancia. Según investigaciones, en esta cuenta se llegó a malversar casi 40 millones de Lps. Esta cuenta supuestamente del erario público tiene su propia historia: la apertura se hizo el 11 de junio de 1997, cuando Luís García Bustamante era alcalde, posteriormente la

manejaron las administraciones de Roberto Larios Silva y posteriormente la de Kilgore. Los imputados, por supuesto, se declararon inocentes de cualquier cargo. Al ex alcalde Kilgore también se le imputaron otras denuncias de irregularidades, como autorizar en el 2005 el pago de 62.8 millones de lempiras en arrendamiento de locales, factura telefónica, viáticos y combustible, según un informe elaborado por las actuales autoridades.

Sin llegar al dramatismo de Kilgore, otro político exhibido públicamente fue el ex presidente Rafael Callejas, a quien el gobierno de los Estados Unidos devolvió de Miami luego de revocarla su visa, por "corrupción oficial pública"; como lo confirmó su cónsul general norteamericano, Ian Brownlee. Judicialmente no hubo seguimiento al caso en Honduras, así que los "tribunales" se mudaron a varias paredes de Tegucigalpa donde aparecieron "pintas" condenando al ex mandatario.

Y así, en el año 2006 fueron caminando las denuncias en esta pasarela de corrupción; en el que todos los hondureños salimos perdiendo. Los actos aquí citados son mínimos con relación a todos los denunciados. Por falta de espacio, faltó resucitar, por

ejemplo, las denuncias señaladas por el entonces gerente de la ENEE, Juan Bendeck, en relación a la generación y consumo de energía eléctrica; o algunas situaciones relacionadas con SOPTRAVI, FENAFUTH, PANI, FOSOFI y muchas más.

Estamos iniciando un nuevo año. De acuerdo a la teoría de la incertidumbre, el 2007 puede ser un año más de impunidad para todas estas denuncias; o puede ser el año en el cual se haga sentir el peso de la ley. En buena medida dependerá de la voluntad política del Presidente Zelaya y del compromiso a favor de la probidad de quienes rectoran instituciones tan importantes como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Sin duda, el registro cotidiano de la corrupción revela que tiene nombres y apellidos. Que lo poco que trasciende es suficiente como para comprender que será imposible combatir la pobreza si el Estado no encabeza una lucha frontal contra el robo de los bienes públicos y que esa lucha debe hacerse de manera colectiva. El compromiso, por supuesto, es también de la ciudadanía, teniendo en cuenta que es ella la que ganará con la transparencia y que es ella la que pierde con la corrupción.



El congreso también debe pasar a examen



En el balance del primer año del Gobierno Liberal se concentra mucho la atención en lo actuado por el Presidente Manuel Zelaya Rosales y es correcto, sin embargo, la lupa debiera concentrarse también en el Congreso Nacional, por ratos – valorando su actuación y poder- más Presidenciable que el propio Presidente.

Dos días antes de Zelaya, los 128 diputados del Congreso Nacional (lo integran un diputado y un suplente electos por cada 35,000 personas o fracción superior a 15,000) tomaron posesión de sus curules para iniciar un nuevo período legislativo de cuatro años, está vez encabezado por el diputado liberal Roberto Michelletti, (período 2006-2010).

Como parte de los compromisos de país suscritos en septiembre del 2001 (acordados con el respaldo del PNUD), el actual Congreso fue elegido mediante la modalidad del más votado (con fotografías) que sustituyó la lista cerrada y en orden descendente de elecciones anteriores. Producto de ello se renovó el 50% de los diputados. De los 62 diputados del Partido Liberal, 40 lo son por primera vez; de los 55 del Partido Nacional, 19; de los cinco de Unificación democrática, 3; de los tres del Partido Demócrata Cristiano, 2; y de los dos del Partido Innovación y Unidad; uno.

Para los nostálgicos del monopolio político, si la elección hubiese sido por la modalidad simple del más votado el panorama sería otro: 86 diputados liberales, 42 nacionalistas y cero de los otros partidos políticos minoritarios. Los liberales tendrían suficientes votos como para reformar o sustituir la Constitución de la República a su gusto.

Quizá el elemento más significativo bajo el procedimiento vigente es que resultaron electas 36 diputadas propietarias mujeres, cuando en el Congreso anterior apenas eran 7. Las mujeres llegaron más al Congreso Nacional para sorpresa de los caudillos varones, que ni siquiera cumplieron – salvo los partidos pequeños- con la cuota mínima de 30% de candidaturas encabezadas por mujeres que establece la ley.

Renovación de rostros y de ideas?

La renovación masiva que hubo de diputados (as) en la Cámara Legislativa motivó un proceso de aprendizaje en técnicas parlamentarias y cabildeo que se prolongó todo el año, pero que no es excusa para la pobre producción legislativa.

La presente legislatura es la de más bajo rendimiento comparado respecto a los últimos dos congresos (1998-2002, encabezado por el liberal Rafael Pineda Ponce, y 2002-2006, encabezado por el nacionalista Porfirio Lobo Sosa).

En el período de la legislatura 2006-2007 solamente se aprobaron 5 leyes: de Participación Ciudadana, de Implementación del TLC CA-EEUU, de Tarjetas de Crédito, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Instituto de Previsión Militar.

Un monitoreo del CIPRODEH reveló que de 575 proyectos y mociones presentadas a consideración del pleno, se aprobaron apenas 154, en su mayoría relativas a otorgamiento de contratos para obras públicas y acciones administrativas (condecoraciones, apertura de escuelas, y otras).

En total, el Congreso Nacional tuvo 108 sesiones en el período, de las cuales únicamente 22 fueron presididas por su Presidente Roberto Michelletti, más preocupado por ver como se convierte en candidato presidencial de su partido, pese a que la ley lo prohíbe.

Como es de todos (as) conocido, por segundo período consecutivo, el partido que gana la Presidencia en las elecciones generales no logró ganar la mayoría simple (65 escaños) en la Cámara Legislativa. Ese fenómeno provoca al menos dos circunstancias políticas claves en la lectura de país: primero, el gobierno depende del apoyo (negociación) de otros partidos para aprobar las leyes y resoluciones presentadas, y, además, vuelve más complejas las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

La democracia: pendiente en el Congreso

Bajo esas circunstancias, si al Presidente Zelaya se le achaca ser autoritario y personalista en el ejercicio de sus funciones, el Presidente Michelletti es la encarnación pura de esas características. El Congreso Nacional se maneja en su puño o a través de su puño.

Teóricamente hay democracia en el parlamento, pero en la práctica el Reglamento Interno da potestades dictatoriales.

En lo interno, de las 61 comisiones parlamentarias (un número considerado excesivo), los diputados liberales presiden 34, los nacionalistas 19, la Democracia Cristiana 4, el PINU 2 y Unificación Democrática 2.

Sin embargo, la experiencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública confirmó que las comisiones, a lo sumo, hacen el trabajo de carpintería legislativa inicial, pero que a la hora de redactar la propuesta final, otros son los que tienen la palabra respecto a su contenido. Pese a ello, las comisiones tampoco funcionan como tales y sus propuestas suelen ser débilmente sostenidas, por lo que resulta difícil defenderlas.

Dos conclusiones generales relevantes se observan en el análisis de la legislatura: la renovación de rostros no implicó renovación de ideas, cambio de actitudes o calidad de las propuestas. La línea de partido sigue imponiéndose. Y, la segunda, es que el aumento de diputadas no representó una mejoría equivalente en el enfoque de género.

La asignatura pendiente de esa nueva generación de diputados es la democratización del Congreso, pero no se observa ni valentía, ni decisión en ellos. Mecanismos como la pizarra electrónica siguen sin ejecutarse y los diputados no saben cuál será la agenda del día, lo que facilita la manipulación desde la Junta Directiva. En el 2006 hubo conatos de choques de parte de la bancada nacionalista contra el Presidente Michelletti, pero esas acciones se vuelven espacios de negociación "privados", que terminan disipando las tensiones y facilitando acuerdos.

Lo más conflictivo ocurrió en agosto pasado con la decisión tomada por dos diputadas nacionalistas, Ilsa Díaz y Nelly Jerez, de renunciar a sus cargos en la junta directiva del Congreso, cuyo trasfondo se advierte como una de las primeras maniobras por parte de los diputados del PN para reposicionarse en anticipación a las próximas elecciones presidenciales de 2009.

En términos estrictos, la "oposición" como tal es aislada, fragmentada y débil.

Leyes por aprobar

Al margen de criterios políticos sectarios, crece el consenso o la impresión de que se requiere un Congreso Nacional cualitativamente eficaz. Lo importante no es tanto el número de leyes que apruebe, sino la calidad y representatividad de las mismas.

En otro orden de temas, no menos importante, la relación del Congreso Nacional con la ciudadanía es distante y conflictiva. Diversas encuestas revelan la escasa credibilidad del Poder Legislativo entre la población. Se le critica ser un poder influido decisivamente por poderes fácticos, que toma decisiones en base a una visión demagógica y patrimonialista. Incluso, en la presente legislatura es cuando menos activa ha sido la Comisión de Enlace entre el Congreso Nacional y la Sociedad Civil, cuya integración despertó expectativas en el anterior congreso.

La repesa de proyectos de leyes no aprobada refleja la tensión y las diferencias existentes entre la dirección del Congreso Nacional y las organizaciones ciudadanas. Entre las leyes claves no aprobadas destacan:

Ley de Protección al Consumidor
Ley General de Agua
Ley de Telecomunicaciones
Reformas a la Ley de Minería
Ley Forestal y de Vida Silvestre
Ley de Paternidad Responsable
Ley de la Judicatura
Ley de la Carrera Judicial
Ley Penitenciaria

La prontitud o la lentitud en la aprobación de las leyes más que con la mecánica legislativa tiene que ver con los intereses políticos y económicos de por medio. Algunas de esas iniciativas tienen ocho años de espera y otras se aprueban en cuestión de días, como ocurrió con la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) respecto al Régimen de Propiedad Intelectual, Régimen Especial de Representantes y Distribuidores, Régimen de Contratación del Estado y del Régimen Sanitario y Fitosanitario.

Zelaya y Micheletti un "matrimonio tempestuoso"

Teóricamente existe independencia de poderes, pero en la práctica no ocurre así. En la relación Congreso-Presidencia se observa la tendencia a la disminución del Presidencialismo y la creciente influencia del legislativo. Cada iniciativa de ley incluye un enfrentamiento entre los intereses que representan ambos poderes, para terminar con consensos mínimos.

Es previsible que la tensión aumente en los próximos tres años cuando deba definirse el rumbo electoral (candidaturas) del

Partido Liberal, tomando en cuenta el hecho significativo que el Presidente Micheletti ya inició en el 2006 una campaña presidencial encubierta, pese a que, lo reiteramos, la ley se lo prohíbe. Respecto al Poder Judicial, lo que se anticipaba como una relación conflictiva, terminó relativamente calma, aunque con seguridad cambiará de tono en el 2007, cuando se comience la discusión para elegir los nuevos magistrados.

La falta de una agenda nacional de desarrollo por parte del Poder Ejecutivo se refleja en el Congreso Nacional, que tampoco tiene un derrotero claro de país que seguir. El Congreso Nacional se concentra en una labor legislativa, que ha sido poca y escasamente calificada y se olvida de otras funciones esenciales que le atribuye la Constitución, entre ellas la fiscalización de las acciones de la administración pública. Algunos críticos sostienen que el país ha salido ganando con la poca producción legislativa de este período.

La mejora cualitativa del Congreso Nacional es básica para la Gobernabilidad del país puesto que en el 2007 tendrá que tomar decisiones que afectan al conjunto de la institucionalidad, entre ellas el nombramiento de los nuevos magistrados de la Corte, del Tribunal Superior de Cuentas y del reciente Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de las leyes pendientes.

Para los especialistas en el tema los principales desafíos respecto al Congreso Nacional incluyen: la modernización de la función legislativa, mejorar el contenido de la agenda legislativa, hacer una correcta selección de los funcionarios públicos que le corresponde nombrar y mejorar (complementar) su relación con los poderes Ejecutivo y Judicial. ¿Será posible o seguirá Micheltti soñando en contrarreformas?



Al margen de criterios políticos sectarios, crece el consenso o la impresión de que se requiere un Congreso Nacional cualitativamente eficaz



Las relaciones con la sociedad civil independiente

Al volver la vista al 2006 resalta el hecho de que las relaciones entre el Presidente Manuel Zelaya y la sociedad civil no son las peores, pero tampoco las mejores.

Como ya ocurrió en el caso del ex presidente Ricardo Maduro, los vínculos de Zelaya con las organizaciones ciudadanas eran mejores en su época de candidato que como gobernante.

A partir de la toma de posesión, las relaciones bilaterales han sido más bien de desconfianza, incertidumbre y hasta enfrentamiento, como ocurrió en el caso de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP).

Los ministros por su posición y experiencia, algunos de ellos incluso dirigen ONGs, son los que debieran contribuir a cambiar esa situación; pero no lo hacen.

Bajo el gobierno liberal se persiste en el error de no entender que el espacio de lo público se ha ampliado y que las ONGs y demás organizaciones de la sociedad civil no son enemigas de los partidos políticos y que tampoco se han propuesto usurpar las funciones del gobernante.

Algunas organizaciones ciudadanas incluso se han comprometido más allá de los límites razonables con ciertas propuestas del Presidente Zelaya.

Un buen ejemplo de ello es la Coalición Patriótica que respalda la decisión gubernamental de cambiar las reglas del juego en la importación de combustibles y que se juega su prestigio en los resultados finales.

El espacio de la sociedad civil es tan amplio que ya no se puede ser ignorado, ni se debe caer en la tentación de pretender manipularlo.

Una participación ciudadana efectiva –máxime en el gobierno del “Poder Ciudadano”– es condición indispensable para la gobernabilidad.

Gobernar democráticamente, en pluralismo, diversidad, y con tolerancia es un reto indudable para el nuevo gobierno. Máxime cuando

en plena campaña electoral sectores importantes de la sociedad civil, como los movimientos de mujeres, los gremios y otros sectores respaldaron la opción liberal más que la nacionalista.

Una preocupación clave de esa sociedad civil es profundizar la articulación institucional de la democracia representativa con la democracia participativa directa. No se trata de reemplazar la una por la otra, sino compartir responsabilidades en el espacio de la nación.

En esa dirección hay muchas propuestas ciudadanas, inclusive en el área política electoral. Las siguientes son algunas de las demandas planteadas al respecto:

- La descentralización administrativa, financiera y fiscal de los procesos electorales
- Elecciones de las corporaciones municipales en fecha separada a la elección presidencial y legislativa
- Mayor control fiscal y legal sobre el financiamiento a las campañas electorales
- Dar estricto cumplimiento a los períodos de propaganda electoral
- Ampliar la propuesta original de equidad de género y pasar de una cuota de 30% a 50%
- Aprobar la figura de revocatoria de mandato, empezando a nivel de alcaldías
- Despolitizar el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas
- Democratizar las elecciones primarias de los partidos políticos
- Promover la ciudadanización de las mesas electorales
- Crear una Fiscal de Asuntos Electorales
- Ensayar en algunas regiones el voto electrónico
- Promover la auditoría ciudadana para todo el proceso electoral, no sólo para el escrutinio final

Reformas de ese tipo confirmarían, efectivamente, el compromiso liberal a favor del

Poder Ciudadano y abrirían un nuevo período de democratización nacional sin precedentes.

Las asambleas “ciudadanas” que, cada vez menos, convoca el Presidente Zelaya son otra cosa y los liberales no deben correr el riesgo de confundir la opinión de los militantes de un partido con la opinión pública.

En varias ocasiones organizaciones de la sociedad civil han hecho públicos estos planteamientos, pero aún afrontan sectores extremadamente conservadores que se oponen a las mismas.

Articular institucionalmente la relación entre el sector público y el sector no gubernamental dejó mucho que desear en el 2006 y el reto es que esa situación cambie para el 2007. La mejor opción que el Presidente Zelaya puede tomar para su propia estabilidad es contribuir a la construcción de una sociedad civil fuerte, plural y propositiva. Más allá de las reformas políticas planteadas, hay demandas claves desde la ciudadanía que aguardan al presidente Zelaya y sus asesores más próximos: ser tomados en cuenta en la renegociación de un acuerdo con el FMI, la renegociación de la deuda interna, trascender la matrícula escolar gratis y mejorar la calidad de la educación, aprobar una Ley de Servicio Civil, garantizar una efectiva descentralización del Estado, fortalecer las transferencias a las municipalidades y promover la fiscalización participativa de las mismas... en fin, la lista es extensa y vital para la salud de la democracia hondureña.

**Adquiera en las oficinas de FOSDEH un ejemplar
GRATIS de: Honduras: Balance 2006**



Honduras
balance 2006

o búsquelo en nuestra página web: www.fosdeh.net